

Bogotá, D.C.
543

MEMORANDO

PARA: **DIANA MARCELA ZARABANDA SUAREZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaría Distrital de Gobierno

DE: **CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA**
Alcalde Local de San Cristóbal

ASUNTO: **ACCIÓN DE TUTELA No. 2025 -00357**
JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE
CONTROL DE GARANTÍAS

ACCIONANTES: **NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA**
ORTIZ MARTÍNEZ

ACCIONADOS: **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, ALCALDÍA LOCAL DE SAN**
CRISTÓBAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU,
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES Y CARVEPA S.A.S

RADICADO: **ORFEO No. 20254214145782**

ANTECEDENTES

Las señoras **NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA ORTIZ MARTÍNEZ** presentan acción de tutela por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad y dignidad humana. Aduciendo que han desempeñado como trabajadoras informales por más de 10 años en el espacio público en la Carrera 6 #20a-41 sur, barrio 20 de julio en la ciudad de Bogotá, y que actualmente se esta llevando a cabo la instalación de casetas o módulos en el mismo punto donde las accionantes has estado desarrollando su actividad.

HECHOS

El Despacho de la Alcaldía Local de San Cristóbal se abstiene de emitir pronunciamiento respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, en tanto los mismos resultan ajenos a su ámbito de competencia y conocimiento. Lo anterior, debido a que las accionantes refieren circunstancias de tiempo, modo y lugar frente a las cuales esta Administración no se encuentra en capacidad de dar fe, confirmar o desvirtuar.

De igual manera, las accionantes manifiestan contar con la asignación y reconocimiento del espacio en el cual han desarrollado su actividad durante aproximadamente diez (10) años. Al respecto, es preciso señalar que la Alcaldía Local de San Cristóbal carece de competencia para asignar o adjudicar el uso del espacio público a particulares, toda vez que sus funciones se circunscriben a la protección, recuperación, conservación y defensa del espacio público, no tenemos competencia relacionada con administración del espacio público, de conformidad con la normatividad vigente.

Por otro lado, señalan las accionantes que, pese a encontrarse caracterizadas, no se les suministró información relacionada con la instalación de las casetas, ni se les ofrecieron alternativas de reubicación. Frente a lo anterior, resulta pertinente precisar que la entidad facultada para adelantar procesos de caracterización y para brindar la correspondiente oferta institucional a vendedores informales, corresponde directa y exclusivamente al Instituto para la Economía Social –IPES–. En el mismo sentido, corresponde a dicha entidad el proceso de instalación de los módulos o casetas a los que hacen referencia las accionantes en su escrito de tutela.

PRETENSIONES

Las señoras **NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA ORTIZ MARTÍNEZ**, relacionan en su escrito de tutela, las siguientes pretensiones:

- “1. Amparen mis derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso administrativo, a la confianza legítima y al derecho a la igualdad.”*
- 2. Ordenen a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra), suspender cualquier actuación orientada al retiro, desalojo, desmonte o restitución del espacio donde históricamente, han ejercido su actividad económica, hasta tanto se surta un debido proceso real y efectivo, respetando los parámetros fijados por la Corte Constitucional ...” (Sic)*

EXCEPCIONES PROPUESTAS

I. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Al respecto se debe tener en cuenta que la Constitución Política, en el artículo 121, dispone:

“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

En tal sentido, respetuosamente solicito al señor juez, tener en cuenta el principio de competencia administrativa emanado de la Ley 489 de 1998, por el cual cada organismo y entidad pública debe ejercer las potestades y atribuciones inherentes a la labor que desarrolla en virtud de los parámetros normativos; de la misma forma y en virtud del principio de coordinación, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones.

En el caso particular de los Alcaldes Locales, se debe tener en cuenta las competencias contenidas en el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021. De tal manera que no es dable ordenar cumplimiento alguno, por cuanto las pretensiones recaen exclusivamente sobre el Instituto para la Economía Social - IPES.

Lo anterior, tal y como lo establece el acuerdo No. 257 de 2006, y su modificación mediante el artículo 125 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 en su artículo 79 adicionado por los Acuerdos 25 de 1972 y 04 de 1975, el **Instituto para la Economía Social – IPES tiene entre otras las siguientes funciones:**

“Definir, diseñar y ejecutar programas, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital, dirigidos a otorgar alternativas para los sectores de la economía informal a través de la formación de capital humano, el acceso al crédito, la inserción en los mercados de bienes y servicios y la reubicación de las actividades comerciales o de servicios.

Gestionar la consecución de recursos con entidades públicas, empresas privadas, fundaciones u Organizaciones No Gubernamentales - ONGs nacionales e internacionales para ampliar la capacidad de gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los programas y proyectos.

Adelantar operaciones de ordenamiento y de relocalización de actividades informales que se desarrollen en el espacio público.”

Es por ello por lo que, en forma respetuosa se solicita declarar la **“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”**, como quiera que a pesar de la informalidad que caracteriza la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad, los cuales deben encontrarse satisfechos para que el juez constitucional pueda entrar a resolver de fondo los casos que sean allegados a su despacho.

La acreditación de la legitimación en la causa de las partes para actuar procesalmente, ya sea en calidad de accionante (legitimación por activa) o de accionado (legitimación por pasiva), es uno de los requerimientos que deben ser objeto de análisis por el juez de tutela frente a cada asunto sometido a su consideración; por tanto, la legitimación por pasiva dentro del trámite de la acción de tutela hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso.

Diferentes decisiones sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva se pueden consultar en las sentencias: T-462 DE 1996; Auto No. 312 del 2001; T-519 del 2001; T-1001 del 2006 de la Honorable Corte Constitucional; Consejo de Estado, en decisión adoptada en el proceso con radicado 76001-23-25-000-1997-03056-01.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-1015 de 2006, MP. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, indicó:

*“(…) Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que no se debe actuar con excesivo rigor en el análisis de los requisitos formales de la demanda, en perjuicio de la protección debida a los derechos fundamentales en juego. **Además, se ha pronunciado frente al deber irrenunciable del juez de tutela en la integración del contradictorio, cuando considera que la demanda se dirige contra quien no está llamado a responder por la vulneración del derecho fundamental.** En ese sentido ha dicho que “en virtud de la oficiosidad e informalidad que orientan el proceso de tutela, esta no puede ser denegada con base en argumentos de tipo formalista o en factores que pueden ser fácilmente superados por decisiones del juez constitucional, ya que, entre sus deberes se encuentra el de vincular al trámite de la acción, a todos aquellos que por disposición legal y constitucional puedan resultar comprometidos en la afectación de los derechos fundamentales del accionante o de sus representados. (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto)*

Con lo anterior se evidencia la abundante jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en la que se pronuncia frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva; es esta la razón por la que al advertir que la Alcaldía Local de San Cristóbal no es responsable de la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante, no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela, pues no existe nexo de causalidad entre la vulneración y la actuación activa u omisiva por parte de la accionada.

CONCLUSIONES

Atendiendo el escrito de tutela, respecto a la Alcaldía Local de San Cristóbal se propone la excepción denominada FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, toda vez que carece de competencia para atender las pretensiones del accionante, sobre solicitudes que recaen sobre el Instituto para la Economía Social - IPES.

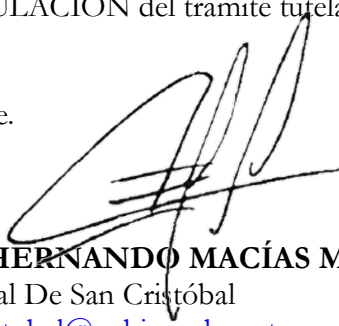
Se advierte LA INEXISTENCIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS por parte de la ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL, al encontrarse demostrado que, en los hechos y pretensiones indicados en el escrito de acción de tutela, no tiene competencia o injerencia alguna.

PETICIÓN

Conforme a los argumentos expuestos en la presente respuesta a la acción de tutela, con el debido respeto solicito:

Declarar la improcedencia de la acción de Tutela en contra de la Alcaldía Local de San Cristóbal, en virtud de la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se solicita la DESVINCULACIÓN del trámite tutelar.

Atentamente.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

CARLOS HERNANDO MACÍAS MONTOYA

Alcalde Local De San Cristóbal

Alcalde.scristobal@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Yuliet Patarroyo Sabi CPS 187-2025

A small, handwritten signature in black ink.

Revisó: Cindy Stefany Heredia – CPS 035-2025

A small, handwritten signature in black ink.

Revisó: Fernando Andrés Carvajal Molina CPS-009-2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fernando A. Carvajal".